

El Trabajo Social Forense en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

Resumen

En el siguiente artículo se trata de visibilizar la labor que desempeñan los profesionales del Trabajo Social Forense dentro de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, labor en muchas ocasiones desconocida incluso dentro de la propia profesión. Asimismo, se centra en conocer las distintas funciones que realizan los profesionales del trabajo social forense como miembros del Equipo Técnico Psicosocial dentro de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

Para ello se lleva a cabo un breve encuadre histórico y metodológico de dicha labor para centrarnos en el conocimiento inductivo desde la práctica y la experiencia profesional.

Palabras clave

Trabajo Social Forense. Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Experiencia Profesional.

Forensic Social Work in the Penitentiary Surveillance Courts

Abstract

The following article tries to make visible the task carried out by Forensic Social Work professionals within the Penitentiary Surveillance Courts, work that is often unknown even within the profession itself. Likewise, it focuses on knowing the different functions carried out by Forensic Social Work professionals as members of the technical team within the Penitentiary Surveillance Courts. For this, a brief historical and methodological framework of this task is carried out to focus on inductive knowledge from practice and professional experience.

Keywords

Forensic Social Work. Prison Surveillance Court. Professional Experience..

Author/Autora

M^a Ángeles Mena Mercado

Diplomada en Trabajo Social. Postgrado de Técnico en Integración Laboral.

Miembro del grupo de trabajo de justicia del COTS de Madrid.

m_angelesmena@yahoo.es

Introducción

El objetivo de este artículo es visibilizar la labor profesional que realizan los profesionales del Trabajo Social Forense dentro de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, desde un enfoque práctico basándonos en la experiencia profesional diaria y la reflexión de los miembros del equipo de trabajo sobre dicha labor.

Se quiere compartir dicho conocimiento y praxis puesto que dicha función es, en muchas ocasiones, desconocida incluso dentro de la propia profesión, siendo necesario un reconocimiento de la misma dentro del propio sistema judicial para ponerla en valor y empoderarla.

1. Antecedentes

Los antecedentes de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se podrían remontar a los últimos momentos del gobierno de Manuel Azaña durante la Segunda República, donde se publica la Ley de Vagos y Maleantes en 1933, conocida popularmente como *“La Gándula”*, en donde se hace referencia al tratamiento de vagabundos, nómadas, proxenetas y cualquier otro elemento considerado antisocial que posteriormente, y en 1954, ya durante la dictadura franquista, fue modificada para reprimir también a las personas homosexuales, estableciendo el *“control de mendigos, rufianes sin oficio conocido y proxenetas”*. Se trataba de una ley que no sancionaba delitos como tal, sino que intentaba evitar la comisión futura de los mismos, por lo que no incluía penas sino medidas de alejamiento, control y retención de los individuos supuestamente peligrosos hasta que se determinara que se había acabado su

peligrosidad. Al quedarse así establecida, fue utilizada arbitrariamente para la represión de las personas sin recursos económicos.

Dicha ley es sustituida por la ley 16/1970 del 4 de agosto sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social. La orden del 3 de junio de 1971 confirmaba como Jueces de Peligrosidad y Rehabilitación Social, a los hasta ahora Magistrados titulares de los Juzgados especiales de Vagos y Maleantes de Madrid y Barcelona, y atribuía la competencia de esta legislación en las restantes capitales de provincia, a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción y en las capitales donde hubiera varios, a su Decano.

La ley 42/1974 de 28 de noviembre de Organización del Poder Judicial (que sustituye a la Ley Orgánica de la Justicia del 15 de septiembre de 1870), establece en su articulado nuevas conductas de peligrosidad social, atribuyendo a los Jueces de Peligrosidad y Rehabilitación Social este único cometido, con un ámbito territorial que pudiera abarcar a una o más provincias. En diciembre de este mismo año, nuevas disposiciones legales van a afectar al ejercicio de esta competencia, la Ley 43/1974 del 28 de octubre (artículo 8º) y el Decreto 3402/1974 de desarrollo de la misma (artículo 3º), creando Juzgados de contenido único para ejercer esta jurisdicción especial: *“De los servicios técnicos auxiliares de la Justicia: Setenta y ocho. Auxiliarán, con las funciones asesoras y periciales que las Leyes les atribuyan, a los Juzgados y Tribunales, funcionarios públicos especializados. Se crearán, asimismo, clínicas, institutos o laboratorios al servicio de la Justicia para los actos de investigación y comprobación que fueren precisos.”*

Es en la Ley orgánica del 1/1979 de 26 de septiembre donde se crean los Juzgados de Vi-

Forensic Social Work in the Penitentiary Surveillance Courts

gilancia Penitenciaria y por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial del 9 de julio de 1981 se les atribuye la función de Jueces de Vigilancia Penitenciaria a los titulares de los Juzgados de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

La disposición transitoria vigésimo séptima de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 del 1 de julio, retira las competencias para las que fueron creados, a los Juzgados de Peligrosidad y Rehabilitación Social, atribuyendo la potestad jurisdiccional al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, recogiendo además las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias y demás que señale la Ley. La atribución definitiva de la competencia territorial de estos órganos jurisdiccionales viene establecida en la Ley 38/88 de 28 de diciembre de Demarcación y Planta Judicial.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria tiene una competencia jurisdiccional específica que actúa en una triple vertiente: la ejecución de las penas privativas de libertad, las medidas de seguridad y el control jurisdiccional sobre la administración penitenciaria en relación a los derechos de las personas internas, tanto fundamentales como los específicos que se deriven de los beneficios penitenciarios.

En los artículos 76 y 77 de la Ley orgánica del poder judicial 6/1985 se le atribuye al Juez de Vigilancia Penitenciaria las siguientes funciones:

1. Adoptar las decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones en

orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo.

2. Aprobar la libertad condicional en todas sus variantes.
3. Aprobar los beneficios penitenciarios que supongan un acortamiento de la pena.
4. Aprobar las sanciones de aislamiento en celdas superior a 14 días.
5. Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias.
6. Resolver los recursos de clasificación inicial, progresiones y regresiones de grado.
7. Acordar lo que proceda sobre peticiones o quejas de los internos en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario, en cuanto afecte a los derechos fundamentales o a derechos y beneficios penitenciarios.
8. Realizar las visitas a los Centros Penitenciarios.
9. Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a 2 días, excepto a los clasificados en tercer grado de tratamiento penitenciario.
10. Conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a propuesta del director del establecimiento.

En Madrid, el primer Juzgado de Vigilancia Penitenciaria fue creado en 1979, instaurándose

El Trabajo Social Forense en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

progresivamente los cinco siguientes hasta designar al número 6 en 2009.

2. El profesional del trabajo social en el ámbito judicial

En diferentes textos jurisdiccionales se hace referencia a la actuación de técnicos especializados en el ámbito judicial y donde tiene cabida la intervención de los profesionales de trabajo social en la Administración de Justicia: Artículo 92 de la Ley del Divorcio Ley 30/81, del 7 de Julio, Artículo 508 de la Ley Orgánica del Poder Judicial/1985 del 2 de julio donde se recoge la posibilidad de que la Administración de Justicia pueda contratar a profesionales y expertos para auxiliarla, Artículo 92 y Artículo 1242 del Código Civil, Real Decreto de 24 de julio de 1889, Libro Blanco de la Justicia publicado en 1997 por el Consejo General del Poder Judicial, en las recomendaciones que se hacen para la mejora de la Justicia, en la página 210 y 211 refieren sobre los Juzgados de Familia, en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero, que entra en vigor el 8 de enero de 2001, se recogen modificaciones en lo referente al dictamen de peritos en distintos artículos.

3. Funciones del trabajo social dentro del Juzgados de Vigilancia Penitenciaria

El objeto de la intervención del profesional del trabajo social forense es el asesoramiento al Juez/Magistrado del Juzgado, aportando el conocimiento, el análisis y la interpretación diagnóstica de la realidad socio-familiar de la población penitenciaria y su red relacional de apoyo, emitiendo un informe pericial, el cual puede ser utilizado

para fundamentar las decisiones judiciales según el criterio del Magistrado.

El ámbito de actuación del trabajador/a social forense comprende: permisos penitenciarios, clasificaciones de grados, progresiones/regresiones de grados, suspensión de la ejecución del resto de la pena (Ley Orgánica 1/15) y seguimientos.

Las competencias de dichos profesionales en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria son el análisis y valoración social de la persona penada, estudio y valoración de la red sociofamiliar, evolución en el área toxicofílica y de salud, análisis del área laboral, determinar y valorar los factores sociales que inciden en la reincidencia, ofrecer información sobre recursos sociales a las personas penadas, a su núcleo relacional y al Magistrado, aportar asesoramiento y prestar información al Juez y realizar seguimientos, con el objetivo de responder a la demanda del Magistrado.

4. Habilidades y actitudes del profesional del trabajo social forense en los Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

La actuación del trabajador/a social forense en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria tiene que regirse en base a los valores, principios y normas establecidas en el Código Deontológico de la profesión, creado en 1999 y actualizado en el 2012, en la Asamblea General de Colegios Oficiales de Trabajo Social del 9 de junio.

Se debe tener en cuenta la relevancia que tiene todo lo referente a la confidencialidad y secreto

Forensic Social Work in the Penitentiary Surveillance Courts

profesional, al manejarse una gran cantidad de datos e información especialmente delicada. Es por ello, que durante las entrevistas mantenidas con las personas penadas y con su red de apoyo se les comunica que toda la información que facilite será comunicada en su totalidad al Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente. Así mismo, en la fase de recogida de datos, el profesional necesita recopilar toda la información pertinente para la correcta elaboración del diagnóstico social y emitir el informe pericial, siendo necesario que la persona penada sea informada de la finalidad de la recogida de datos, que lo entienda y que acepte la cesión de los mismos.

Es necesario tener en cuenta que en ocasiones los penado/as facilitan información desconocida por la propia red de apoyo, siendo nuestra labor contrastarla sin ser revelada a ésta, aunque sí es importante dar constancia de ello en el informe social. La información aportada en el informe debe de contener exclusivamente los datos necesarios para dar respuesta al objeto de la pericial, evitando la exposición de datos irrelevantes.

Cabe destacar que los trabajadores/as sociales forenses de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria están exentos de la confidencialidad y el secreto profesional, en la emisión y entrega del informe social forense al Juez, al estar su actuación localizada en un contexto jurídico, por mandato legal (art. 54 del código Deontológico).

Por lo tanto, el profesional del trabajo social forense en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria debe actuar conforme a los principios básicos y generales de la profesión, recogidos en el capítulo 2 del Código Deontológico, además de disponer de las habilidades sociales propias de la misma. Sin embargo existen otras habilidades, capacidades y

actitudes que, aun siendo necesarias también en otros ámbitos de la profesión, son imprescindibles en el ámbito jurídico, como por ejemplo: afrontamiento de situación de crisis, prevención de conflictos, manejo de las emociones, asertividad, iniciativa, empatía, asunción de riesgos, actuación en entornos de riesgo, rebatir discrepancias de la información aportada y contrastada, mejora continua de métodos y conocimientos, capacidad de trabajo en equipo, generador de un clima de confianza y respeto, claridad en el lenguaje, observación, estructurar y sintetizar la información, evitar prejuicios y valores morales respecto a los delitos cometidos, flexibilidad y capacidad de adaptación a situaciones no predecibles, constancia, creatividad, sentido de la justicia, competencia emocional, conexión emocional, capacidad de diálogo, capacidad de autocontrol, equilibrio emocional, prudencia y credibilidad entre otras.

5. Modelo teórico en el que se basa la intervención profesional

A nivel general, cabe señalar que la línea teórico-metodológica global de la intervención profesional es una línea basada en planteamientos del interaccionismo simbólico, el enfoque sistémico/ecológico y en los criterios de relación de ayuda del enfoque humanista y, más concretamente, del asesoramiento centrado en la persona de Carl Rogers (empatía, actitud exenta de juicio, aceptación incondicional, confianza en las capacidades de la propia persona para identificar sus problemas y necesidades y, por tanto, buscar posibles soluciones, etc.).

Se considera que el modelo Sistémico-Ecológico es el enfoque que más se ajusta a la intervención que realiza el trabajador/a social forense de los

El Trabajo Social Forense en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, al permitir valorar la interacción entre todos los sistemas que han intervenido en las personas penadas previo al ingreso en el centro penitenciario y los que siguen interactuando en el momento actual ante posibles beneficios penitenciarios.

El modelo Sistémico–Ecológico trata de entablar las relaciones que existen entre las personas y su medio físico y social, estableciendo conexiones entre las necesidades y problemas de los sujetos, y los entornos con los que se relaciona, siendo esta la base de la perspectiva ecológica.

Juan Jesús Viscarret define que: *“La perspectiva ecológica dota de un enfoque adaptativo y evolutivo al ser humano en constante intercambio con todos los elementos de su entorno. El ser humano cambia sus entornos físicos y sociales. Entornos que son cambiados a través de procesos de continua y recíproca adaptación. Cuando esto ocurre positivamente, la adaptación recíproca apoya el crecimiento y el desarrollo de las personas y mejora las condiciones propiciadoras de la calidad de vida. Sin embargo, si este flujo de intercambios favorables, no se cumple, bien por desequilibrios, interrupciones o deterioro, el resultado es negativo tanto para el ser humano como para el medio”*. (Viscarret, J.J, 2007, pag.288), lo que nos sirve de base para la intervención llevada a cabo por el trabajador/a social forense en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

Tratamos de analizar las interacciones que existen entre la persona y los entornos en los que participa, así como los cambios que se han ido produciendo en esas interacciones a lo largo de su estancia en el centro penitenciario hasta llegar al momento actual, valorando las adaptaciones y desequilibrios de las personas penadas y de sus

entornos en todas las áreas sociales y vivenciales de la persona, a través de una visión global de todo su proceso adaptativo.

Con la utilización del modelo Sistémico-Ecológico, no se pretende realizar ningún cambio en los penado/as, función que no corresponde a los profesionales del trabajo social del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, sino que nos centramos en el estudio de las conexiones, y en la valoración favorable y/o desfavorables de los intercambios de las personas penadas con los diferentes entornos, todo ello de cara al tratamiento penitenciario y a la transmisión de las valoraciones y conclusiones al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Se entiende que el desarrollo humano de las personas penadas se ha establecido en función de las interrelaciones y de los procesos acaecidos a lo largo de toda su vida, teniendo en cuenta las conexiones mantenidas en las distintas estructuras: microsistemas, mesosistemas, exosistemas y macrosistemas, estructuras definidas por U. Bronfenbrenner en su obra *“La Ecología del desarrollo Humano”*, por lo tanto, desde el trabajo social forense que se lleva a cabo en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se analiza el contexto social y cultural en el que se enmarcan los distintos entornos en los que se mueven los/as internos/as, la visión social sobre las instituciones penitenciarias, sobre el consumo de sustancias tóxicas, sobre la rehabilitación de las personas presas, etc.

6. Metodología profesional y procedimiento

La intervención de los trabajadores/as sociales forenses en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se inicia cuando se recibe el oficio o providen-

Forensic Social Work in the Penitentiary Surveillance Courts

cia, en donde se solicita la demanda de intervención. La misma siempre es solicitada por el Juez, aunque puede haber sido propuesta o motivada por el fiscal, por el abogado/a, por la persona penada o por sus familiares.

Fundamentalmente la intervención profesional y la petición de informes sociales periciales por parte de los Magistrados suelen ser en base a las siguientes demandas:

- Informe social forense de la persona penada.
- Condiciones sociales e idoneidad del aval (persona responsable de la acogida y el control del/la interno/a, durante sus salidas del centro).
- Condiciones adecuadas para la concesión de permisos penitenciarios, cambio de grado penitenciario y/o concesión de libertad condicional.
- Comprobación e idoneidad de oferta laboral (para incorporación al mercado laboral ante la posible progresión a tercer grado penitenciario o libertad condicional).
- Nivel de reinserción social.
- Seguimientos sobre la adecuación y cumplimiento de la medida impuesta.

El peritaje profesional es importante para valorar la posible concesión o denegación de permisos penitenciarios, tercer grado o libertad condicional, por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, así como regresiones de grado y cambios de grado penitenciario a un régimen semiabierto (art 100.2, art 182, art 86, ... del Reglamento Penitenciario) o seguimientos realizados a las personas penadas y

solicitadas por el Magistrado.

Teniendo en cuenta la demanda del Juez de Vigilancia Penitenciaria, el objeto final de la pericial emitida por los trabajadores/as sociales forenses es la valoración del nivel o grado de reinserción social de la persona penada en el momento de realizarse la pericial, entendiendo como inserción social las siguientes definiciones (Instituto foral de BS-Gizarte Ongundearen Foru Elkardea): *“Ser parte de la sociedad significa tener capacidad para influir y disposición para participar en el entorno social con el objetivo de mejorar la propia calidad y la de su comunidad.”*... *“Disfrute de los derechos sociales y oportunidades vitales fundamentales, en definitiva, tener posibilidad del ejercicio del derecho de ciudadanía”*. *“Estado definido por la cantidad y calidad de participación de la persona en su entorno general”*. *“Las acciones para estimular la incorporación tienen que ver con facilitar a las personas aquello que les es imprescindible para ser parte de la vida colectiva y en posibilitar que puedan aportar algo al resto de la sociedad”*... *“Los elementos que definen un estado de incorporación son los siguientes: posibilidades para el ejercicio de los derechos sociales (sanidad, vivienda, educación,...); tener los medios económicos para poder ser ciudadana o ciudadano consumidor, tener cubiertas las necesidades primarias; mantener una actividad (laboral o social) que favorezcan los procesos personales de identificación y autoafirmación; disponer de un entramado relacional (apoyo familiar, social,...); carencia de elementos estresantes tanto de origen externo-cultural (xenofobia, discriminación por razón de edad, sexo, raza,...) como internos-personales (minusvalías, enfermedades,...).”*

Tras dicha petición, los profesionales realizamos un estudio del expediente judicial con el ob-

jetivo de obtener la máxima información a través de diferentes fuentes y sobre distintas cuestiones relacionadas con la persona penada (delito cometido, tratamientos farmacológicos, relaciones con su entorno, características del puesto de trabajo ofertado, información pública, etc.). Si se valora necesario, se realizan gestiones de coordinación con otros profesionales que están interviniendo con la persona interna o que han intervenido en algún momento de su tratamiento penitenciario para poder obtener más información o contrastar la ya obtenida, solicitando informes si el profesional lo considera preciso como, por ejemplo, una solicitud de analítica toxicológica. Dicha coordinación se suele realizar a lo largo del todo el estudio y valoración del caso, puesto que un objetivo de esta coordinación es contar con diferentes alternativas de propuesta de derivación para que la persona y su entorno familiar puedan acceder a servicios y prestaciones una vez se encuentra fuera del centro penitenciario, ya sea en permisos penitenciarios, tercer grado o libertad condicional.

Los datos recogidos, ofrecen la posibilidad de realizar una valoración inicial sobre la situación social no solo del penado/a sino también de su unidad de convivencia y/o relacional, proporcionando una primera valoración de cara a la documentación a solicitar y metodología a utilizar. Con toda la información obtenida y habiendo realizado un guion previo de entrevista, se cita al sujeto para mantener una entrevista personal e individualizada para así dar respuesta al objeto de la pericial a través de la emisión del informe social forense.

Cabe destacar que la observación tanto directa como indirecta es especialmente importante a lo largo de toda la entrevista, teniendo en cuenta que la persona entrevistada no se expresa ni se com-

porta como lo haría de modo usual en su espacio habitual, al tratarse de una imposición judicial y de un entorno hostil para la persona que se encuentra fuera de su zona de confort.

Dentro de la entrevista con el penado/a podemos utilizar diversas técnicas como pueden ser: reflejo, parafraseo, refuerzo positivo, interrogación directa, silencios, interpretación, etc.

A la hora de hacer una entrevista, debemos tener en cuenta que el entrevistado/a, en la mayoría de las ocasiones no ha solicitado la entrevista, por lo tanto, se pueden producir reacciones de oposición, es decir, mecanismos de defensa (huida, racionalización, proyección, introyección, retorno, etc.) de los que el profesional debe ser consciente y saber reaccionar ante ellos para poder continuar de forma fluida con la comunicación.

También existen cuestiones que debemos evitar a la hora de realizar la entrevista en el ámbito judicial evitando las actitudes paternalistas, la no emisión de juicios de valor ni consejos, la no realización de interpretaciones excesivas donde la persona entrevistada se sienta juzgada nuevamente, puesto que hemos podido observar que la persona se siente incómoda y se rompe la comunicación, dificultado la realización de la entrevista.

Por lo general, los profesionales del trabajo social forense en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria realizamos una entrevista semidirigida o semiestructurada con respuestas abiertas, lo cual facilita el feed-back con el penado/a y flexibiliza la intervención favoreciendo la empatía. Evitamos realizar una entrevista con exceso de interrogatorio ya que, según la propia experiencia, las personas entrevistadas suelen mostrarse más reacias y aportan menor información relevante.

Forensic Social Work in the Penitentiary Surveillance Courts

Basándonos en el método de interacción de los diferentes sistemas, el profesional no solo lleva a cabo una entrevista con el interno/a sino también con su núcleo familiar/relacional, aval, redes de apoyo y ofertantes de trabajo, si fuera preciso y necesario, para tener una visión más amplia de las interacciones creadas, relaciones de poder, relaciones familiares, relaciones conflictivas, relaciones de ayuda, etc., por lo que se realizan visitas a domicilio y empresas, solicitando documentación para contrastar las informaciones aportadas por los sujetos.

Tras haber recabado toda la información, se comienza a realizar el estudio social del caso con la finalidad de concluir en el diagnóstico social y dar respuesta al nivel de inserción social de la persona penada, evitando la discrecionalidad de cada técnico, y con el objeto de homogeneizar criterios a través de elementos profesionales explícitos y rigurosos. Cabe decir que se ha llevado a cabo un profundo debate entre los miembros del equipo de trabajo para esclarecer los puntos sobre los que se debería incidir durante la intervención profesional, llegando a establecer unos indicadores o parámetros básicos comunes para el análisis de la información, siendo todos acordados y aceptados por dicho equipo para poder realizar el informe social pericial de la manera más neutral, a fin de valorar los mismos aspectos para poder realizar la evaluación de la persona objeto de la pericial y su posterior diagnóstico, aportando la mayor objetividad en este proceso.

Dichos indicadores se han desarrollado basándonos en la experiencia laboral diaria y se han estructurado en once áreas (penal/penitenciaria, familiar, social/relacional, idoneidad del aval, vivienda/entorno ambiental, formativo/laboral, económica, salud, documental, proyecto vital, ocio y tiempo libre) incluyendo todos aquellos aspectos que se consideran necesarios para la formulación

de las diversas hipótesis y la realización del diagnóstico social.

Tras el análisis de la información y la documentación recogida, el profesional procede a la realización del informe social forense. A través del informe social se describe, analiza e interpreta la información obtenida tras la investigación realizada sobre la persona y su entorno, dando respuesta al objeto de la pericial solicitada y comunicándolo de una forma técnica, clara, concisa, objetiva, exenta de opinión y con imparcialidad, respondiendo siempre a la demanda específica que se nos formula en la providencia solicitada por el Magistrado. El informe social forense como dictamen profesional es el instrumento básico de trabajo, importante pero no decisorio ni vinculante. Se trata de una prueba más dentro del procedimiento judicial, siendo el Juez siempre quién decida si acepta la recomendación que se formula o no en el dictamen técnico del profesional de trabajo social forense.

7. Conclusiones

- El trabajo social forense dentro de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se torna como una labor imprescindible para conocer y valorar la situación global de la persona penada, labor totalmente legitimada y justificada. En muchos casos, es una intervención desconocida incluso para la propia profesión.
- Es importante y útil la función del profesional del trabajo social forense en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria para apoyar la resolución judicial pese a que el informe social emitido no posea capacidad decisoria ni vinculante.

El Trabajo Social Forense en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

- El estudio del caso debe ser objetivo e imparcial, evitando juicios de valor y opiniones personales, para no ir en detrimento de la situación presente y futura de la persona penada.
- El Informe Social es el instrumento básico del trabajo social en el ámbito forense, como medio imprescindible para describir la situación social de la persona penada y el diagnóstico social al que se llega tras el estudio social realizado, siendo la herramienta básica para dar respuesta al objeto de la pericial solicitado por el Juez/Magistrado.
- El objetivo último siempre es la reinserción social de la persona penada y así garantizar los derechos de las personas internas.

BIBLIOGRAFÍA

Manual interno del equipo de trabajo social forense en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria (2017). Madrid.

Acevedo, J. (2003). *Reflexiones acerca del Trabajo Social en las cárceles (1ªed.)*. Buenos Aires. Espacio Editorial.

Ariño Altuna, M., Arrieta Aranguren, E., Artaza Damborenea, C., Etzaniz Aldazabal, C., Irazusta Rezola, M. y Vicuña Irusta, R. (1990). *Manual de Técnicas en Trabajo Social*. Donostia-San Sebastián: Escuela Universitaria de Trabajo Social.

Blanchet, A., Ghiglione, R., Massonnat, J. y Trgnon, A. (1989). *Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. Datos. Observación. Entrevista. Cuestionario*. Madrid. Narcea, S.A. de Ediciones.

Bronfenbrenner, U. (1987). *La ecología del desarrollo humano. Experimentos en entornos naturales y diseñados*. Barcelona. Paidós.

Calleja, j. y Viedma, A. (2010). *Proyectos y estrategias de Investigación Social: La perspectiva de la Intervención*. Madrid. McGraw-Hill.

Carcedo Gonzalez, R.J. y Reviego Picón, F. (2007). *Reinserción, derechos y tratamiento en los centros penitenciarios*. Salamanca. Amaru Ediciones.

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid. (2010). *Curso de la pericial social en la administración de justicia de Madrid*. Madrid.

Consejo General del Trabajo Social (2012). *Código Deontológico*. Madrid

Fernández García, T., de Lorenzo García, R. y Vázquez Aguado, O. (2012). *Diccionario de Trabajo Social*. Madrid. Alianza Editorial.

Font, T. y Porcel, A. (1986). *Estudio sobre técnicas de Trabajo Social*. Barcelona. Materiales de Trabajo Social. Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cataluña.

García Jiménez, M. (2003). *El trabajador social como perito en la jurisdicción penal*. Documentos de Trabajo social. Revista de Trabajo Social y Acción social. ISSN 1133-6552.nº29. 82-112

Goicochea, A. (1942). *Observaciones acerca de la valoración histórica social y literaria del trabajo forense*. Zaragoza.

Forensic Social Work in the Penitentiary Surveillance Courts

- Hernández Escobar, A. (2002). *El dictamen pericial de los Trabajadores Sociales*. Revista La Toga, 133.
- Hernández, A. (2011). *Dictamen pericial social como instrumento procesal*. Curso de iniciación y profundización. Colegio Oficial de Trabajadores de Madrid.
- Hernández, A. *El dictamen pericial como medio de prueba su regulación legal y aplicación en trabajo social*. Firma Quattro. Trabajo Social, S. L. Sevilla.
- Hernández, A. *El informe social como instrumento documental*. Firma Quattro. Trabajo Social, S. L. Sevilla.
- Larrauri, E. (2012). *La necesidad de un informe social para la decisión y ejecución de las penas comunitarias*. Boletín criminológico. Instituto andaluz interuniversitario, noviembre 139.
- Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales (2012). *Curso Intervención social y actuaciones jurídico- penales*. Madrid.
- Ovares Pacheco, E., González Aguilar, M. y González Brenes, R. (2007). *El Trabajo social Forense como Modelo de Intervención. La experiencia en el Poder Judicial*. IV congreso Internacional y VII Congreso Nacional de Trabajo Social. Costa Rica, 5 a 7 de septiembre.
- Puebla, M., Scatolini, J y Mamani, V. (2008). *La construcción del trabajo social en el ámbito de la ejecución penal. Una mirada desde la doctrina constitucional*. Buenos Aires. Espacio Editorial.
- Ríos Martín, J. C (1997). *Reglamento Penitenciario*. Madrid. Colex
- Robles, C. (2004). *La intervención pericial en Trabajo social: orientaciones teórico-prácticas para la tarea forense*. Buenos Aires. Editorial Espacio.
- Ruíz, P. (2003). *El Trabajador Social como perito judicial*. Zaragoza. Libros Certeza.
- Segovia Bernabé, J.L. (1996). *El Código Penal al alcance de todos*. Madrid. Editorial Popular.
- Simón, M. (2011). *El trabajo Social forense y sus dependencias*. IV Jornada de Trabajo Social: Más allá de la dependencia. Escuela Universitaria de Trabajo Social. Vitoria-Gasteiz, 7 de abril.
- Simón, M. (2009). *Aportaciones del Trabajo Social a la pericial de familia*. Madrid. Consejo General del Poder Judicial. Cuadernos de Derecho Judicial.
- Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid(2006). *Guía de Actuación de los Trabajadores Sociales en el ámbito de la administración de Justicia de la Comunidad de Madrid*. Madrid. Comunidad de Madrid.
- Viscarret, J.J. (2007). *Modelos y métodos de intervención en Trabajo Social*. Madrid. Alianza Editorial.
- Zamanillo, T. (2009). *Reflexiones críticas*. Congreso de Trabajadores Sociales. Zaragoza, febrero.